

**2.21. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL A NIVEL INTERNACIONAL (pp. 2-9)**

—

**2.21. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NIVELL INTERNACIONAL (pp. 10-17)**

ROSA M. FERNÁNDEZ EGEA

*Profesora de Derecho Internacional Público / Professora de Dret Internacional Públic*

*Universidad Autónoma de Madrid*

**Sumario:** 1. Corte Internacional de Justicia (CIJ). 2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Debido a la ausencia de un tribunal o foro internacional que tenga competencia para resolver las controversias de carácter ambiental, la jurisprudencia internacional en esta materia, cuando existe, se encuentra diseminada entre las diversas jurisdicciones.

### **1. Corte Internacional de Justicia (CIJ)**

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el único tribunal internacional que cuenta con competencia para resolver cualquier controversia en materia de Derecho internacional ambiental en virtud a su jurisdicción universal. Ahora bien, es cierto que hasta la fecha han sido bastante escasos los asuntos de tinte ambiental<sup>1</sup>.

Sin embargo, el pasado 20 de abril de 2010 la CIJ emitió, el esperado pronunciamiento en relación con una controversia que ha enfrentado a Argentina y a Uruguay durante los pasados cinco años: el asunto sobre la construcción y puesta en funcionamiento de unas fábricas de celulosa o pasta de papel (más conocidas como “papeleras”) junto al Río Uruguay y que fueron autorizadas por Uruguay<sup>2</sup>.

El presente caso cuenta con una virtualidad ambiental innegable por cuanto buena parte de la argumentación argentina en contra de la construcción de las papeleras por parte de Uruguay se basa en motivos ambientales. Así, Argentina interpuso un recurso ante la CIJ arguyendo, entre otras cuestiones, que Uruguay había incumplido una serie de obligaciones de carácter ambiental al autorizar y construir dos papeleras a orillas del Río Uruguay, a saber:

- la obligación de tomar todas las medidas necesarias para la utilización óptima y racional de la utilización del río Uruguay;
- la obligación de tomar todas las medidas necesarias para preservar el medio ambiente acuático y prevenir la contaminación y la obligación de proteger la biodiversidad y las

---

<sup>1</sup> Este fue el caso del asunto *Proyecto Gabčíkov-Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia)* de 25 de septiembre de 1997 y la opinión consultiva de la CIJ en relación con la *Legalidad de la amenaza o uso de las armas nucleares* de 8 de julio de 1996.

<sup>2</sup> El pronunciamiento de la CIJ en el asunto sobre las Fábricas de papel en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) puede consultarse en la página de la propia CIJ: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=au&case=135&k=88>

pesquerías, incluida la obligación de preparar una completa y objetiva evaluación de impacto ambiental;

- la obligación de cooperar en la prevención de la contaminación y en la protección de la biodiversidad y otras pesquerías.

Argentina solicitó el 4 de mayo de 2006 la adopción de medidas provisionales<sup>3</sup>, pidiendo la suspensión de las autorizaciones para la construcción de las papeleras, la cooperación con Argentina y la abstención por parte de Uruguay en la adopción de cualquier otra medida unilateral. La Corte, mediante Auto de 13 de julio de 2006, consideró que las circunstancias no eran tales como para requerir medidas provisionales. En particular, afirmó que Argentina no pudo persuadir a la Corte de que la construcción de las papeleras presentaba un riesgo de daño irreparable para el medio ambiente.

En su resolución sobre el fondo, la CIJ se ha limitado a las cuestiones de interpretación planteadas por las partes en relación con el Estatuto suscrito por Argentina y Uruguay sobre la administración compartida del Río Uruguay de 1975<sup>4</sup>. De esta forma, la Corte se limitó a considerar las alegaciones de Argentina en relación con los posibles perjuicios sobre el medio acuático de dicho río, sin entrar en consideraciones sobre los posibles efectos de las papeleras sobre la calidad del aire, el paisaje o por el ruido causado<sup>5</sup>.

En este sentido, la Corte ha considerado que Uruguay ha incumplido una serie de obligaciones de carácter procedimental, recogidas en los 7 a 12 del Estatuto de 1975. En virtud del artículo 7, Uruguay debió informar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre la autorización de la construcción y puesta en funcionamiento de las papeleras. Además, esta disposición establece una obligación de notificación de las evaluaciones de impacto ambiental a la otra parte, en este caso Argentina, a través de la CARU y siempre y cuando las actuaciones planeadas pudieran entrañar daños transfronterizos importantes para ésta, lo que tampoco fue realizado en tiempo y forma

---

<sup>3</sup> Uruguay también hizo lo propio unos meses más tarde, el 29 de noviembre de 2006, solicitando a la CIJ que dictaminara la obligación de Argentina de evitar los bloqueos que su población civil estaba realizando en el puente sobre el río Uruguay, cerrando el tránsito comercial y turístico de Argentina a Uruguay. Tampoco la Corte accedió a conceder las medidas provisionales solicitadas por Uruguay.

<sup>4</sup> Efectivamente, el artículo 60.1 del Estatuto otorga competencia a la Corte para conocer sobre las cuestiones de los conflictos que surjan entre la partes en lo relativo a la aplicación e interpretación del Estatuto.

<sup>5</sup> Además, deja también fuera de la consideración de la Corte otras posibles obligaciones de Derecho internacional recogidas en diversos tratados ambientales, que también fueron invocados por Argentina.

por Uruguay. Por lo que concierne al resto de artículos, Uruguay no se atuvo a los mecanismos de cooperación en ellos previstos a los que ha de acudir en caso de desacuerdo entre las partes sobre la realización de una actividad que pueda tener impactos sobre la navegación del Río Uruguay, su régimen jurídico o la calidad de sus aguas. No obstante, a pesar de haber declarado el incumplimiento por parte de Uruguay, la CIJ no impuso otra forma de reparación de dicho incumplimiento más allá de la “satisfacción” que supone la sentencia condenatoria para Uruguay. Ello porque, aún habiendo cumplido las disposiciones de carácter procesal anteriormente referidas, Uruguay podía haber procedido con la construcción de las papeleras, incluso con la oposición de Argentina.

En lo que al medio ambiente concierne, Argentina había alegado las siguientes cuestiones sustantivas, a las que se adjuntarán las contestaciones correspondientes de la Corte:

- La obligación de contribuir a la utilización óptima y racional del Río (art. 1 del Estatuto). La CIJ determinó que esta disposición establecía un objetivo pero no derechos y obligaciones concretas para las partes, por lo que su virtualidad es meramente interpretativa. En este sentido, es necesario ponderar los intereses comerciales con los posibles daños que puedan causarse al medio ambiente, tal y como se establece en otras disposiciones del Estatuto de 1975 y no necesariamente ha sido conculcado por el hecho de que Uruguay haya autorizado la construcción de las papeleras.
- La obligación de asegurar la gestión sostenible de la tierra adyacente al Río para que no menoscabe el régimen del río o la calidad de sus aguas (art. 35). Argentina había argumentado que para abastecer de materia prima a las papeleras se había procedido una plantación intensiva y extensiva de eucaliptos en el margen del Río Uruguay que degradaría en un futuro dicho terreno, afectando a la calidad de las aguas del propio río. Sin embargo, la CIJ consideró que Argentina no había probado suficientemente el impacto negativo alegado, por lo que tampoco se produjo una vulneración de esta disposición.
- La obligación de coordinar las medidas para evitar cambios en el balance ecológico (art. 36). Argentina sostuvo que la evacuación de sustancias procedentes de las papeleras podía alterar el balance ecológico del río. Sin embargo, la Corte consideró que

se trataba de una obligación de conducta dirigida a los dos Estados y no de resultado. En particular se trataba de observar la diligencia debida a la hora de colaborar, a través de la CARU, en la adopción de dichas medidas. De nuevo, en opinión de la CIJ, Argentina no había probado suficientemente que Uruguay había rechazado la cooperación exigida en dicho precepto.

- La obligación de adoptar medidas para prevenir la contaminación y preservar el ambiente acuático, de acuerdo con los acuerdos internacionales aplicables y las recomendaciones técnicas internacionales (art. 41). Argentina había alegado que las evacuaciones procedentes de las papeleras constituían una vulneración de las obligaciones del Estatuto y de otros instrumentos internacionales aplicables entre las partes que prohíben toda contaminación que pueda perjudicar la protección y preservación del medio ambiente acuático. Uruguay, por su parte, sostuvo que lo que está prohibido por el Estatuto es sobrepasar ciertos estándares de contaminación convenidos conjuntamente por ambas partes en el seno de la CARU. En este caso, la Corte también consideró que el precepto recoge una obligación de actuar con la diligencia debida en relación con todas las actividades que se desarrollan bajo la jurisdicción y control de los Estados. Todo ello con el objetivo de prevenir la contaminación, definida ésta en el artículo 40 del Estatuto de 1975 como la introducción de sustancias en el medio acuático de forma directa o indirecta por parte del hombre que produzca efectos dañinos para dicho medio. En este sentido, antes de desarrollar actividades que entrañen dichos riesgos, es necesario elaborar una evaluación de impacto ambiental y, en particular, determinar si la evacuación de fluidos por parte de las papeleras se realiza en una concentración tal que supera los estándares de gestión sostenible del río. La Corte admitió que carecía de información para determinar si existen estos riesgos y para decidir consecuentemente que Uruguay había incumplido esta obligación, información que tampoco había sido proporcionada fehacientemente por Argentina. De esta forma, la CIJ concluyó que Argentina no había probado que Uruguay no actuó con la diligencia debida ni había aportado datos concluyentes que apoyaran que el funcionamiento de las papeleras podían causar daños a los recursos vivos, a la calidad del agua o al equilibrio ecológico del Río Uruguay.

De esta forma, la CIJ rechazó todas las alegaciones de Argentina en materia ambiental, decidiendo igualmente que no se aplicaba el principio de precaución alegado por Argentina para invertir la carga de la prueba. Consecuentemente, las papeleras seguirán

funcionando, si bien, la Corte ha incidido en su pronunciamiento sobre la obligación de cooperar de estos dos países a la hora de supervisar su actividad en el futuro.

## **2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)**

Frecuentemente los tribunales encargados de la salvaguarda de los derechos humanos se enfrentan a supuestos con una incidencia ambiental clara. No en vano, la protección del medio ambiente se encuentra estrechamente unida al disfrute de algunos derechos fundamentales. Pero también en ocasiones los derechos fundamentales protegidos por las convenciones internacionales encuentran límites en la salvaguarda de otros intereses que han de ser ponderados, como por ejemplo, la protección ambiental. Éste es precisamente el caso en los supuestos a los que se hará referencia a continuación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado en los últimos meses algunos pronunciamientos que inciden de forma más o menos indirecta en la protección del medio ambiente, a pesar de tratarse de una jurisdicción relativa a la salvaguarda de los derechos fundamentales recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos<sup>6</sup>. A continuación se procederá a resumir brevemente los hechos y fundamentos de Derecho:

- Asunto *Huoltoasema Matti Eurén Oy y otros c. Finlandia* de 19 de enero de 2010. En dicho asunto el reclamante es una compañía (Huoltoasema) propietaria de una estación de servicio situada sobre una cuenca de aguas subterráneas. Con la entrada en vigor de la Ley de Protección Ambiental finlandesa de 2000, todas las actividades susceptibles de causar contaminación ambiental estaban obligadas a solicitar un permiso a la autoridad administrativa correspondiente. La compañía Huoltoasema solicitó el preceptivo permiso, aprovechando la ocasión para pedir una autorización para ampliar la capacidad de almacenamiento de gasolina, que le fue concedida sometida a una serie de condiciones de restructuración. Sin embargo, el Centro de Medio Ambiente Regional Häme apeló la decisión ante el tribunal administrativo correspondiente puesto que, en su opinión, dicha actividad constituía un peligro para la calidad de las aguas subterráneas. Tras varios recursos, finalmente los tribunales decidieron retirar el permiso puesto que las medidas propuestas por Huoltoasema no garantizaban la eliminación del riesgo

---

<sup>6</sup> La jurisprudencia del TEDH puede consultarse en la página Web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>

sobre las aguas subterráneas. Entonces, la reclamante volvió a solicitar un permiso, esta vez para reducir la capacidad de gasolina, que le fue otorgado en un primer momento para luego retirárselo de nuevo en siguientes instancias judiciales por no garantizar plenamente la seguridad de las aguas subterráneas. Finalmente la compañía tuvo que cerrar la estación de servicio.

De los diversos derechos fundamentales que según la reclamante se habían conculcado por las autoridades judiciales y administrativas finlandesas, la reclamante invocó el artículo 6.1 de la CEDH puesto que el tiempo empleado en los diversos procedimientos sobrepasaba el “tiempo razonable” requerido por este precepto. El TEDH consideró que los dos procedimientos que entrañaron ambas solicitudes de permiso para proseguir con la actividad de la estación de servicio constituían una unidad y que al haber tenido una duración total de seis años y seis meses, ésta fue excesiva, vulnerándose el citado precepto.

En segundo lugar, la compañía reclamante alegó que se había vulnerado su derecho a la propiedad contemplado en el artículo 1 del Protocolo nº1 anexo a la CEDH. En este punto es donde el TEDH realizó una serie de consideraciones a favor de la protección ambiental que merece la pena subrayar. Para el TEDH no existía duda alguna que la reclamante contaba con una posesión y que se había interferido el derecho a su disfrute pacífico. Sin embargo, la interferencia en este caso se fundaba en la Ley de Protección Ambiental finlandesa, que era lo suficientemente clara, previsible y accesible para el público. En su opinión, la denegación de otorgar el permiso de actividad para la estación de servicio tuvo base legal y perseguía un interés general, como es la protección del medio ambiente. El TEDH prosiguió argumentando que la parte reclamante no podía alegar la expectativa legítima de obtener el permiso y que tendría que haber considerado que la protección del medio ambiente goza de una importancia creciente en la actualidad. En este ámbito los Estados cuentan con un margen de apreciación amplio hasta el punto de poder imponer una prohibición absoluta sobre la contaminación acuífera, ya que las aguas subterráneas son de muy difícil o incluso imposible de purificar, lo que justifica el importante interés general existente.

Por último, el TEDH también denegó la pretensión de la parte reclamante en relación con la vulneración del artículo 14 de la CEDH, alegando que la estación de servicio había sido objeto de un trato discriminatorio respecto de otras actividades situadas en el mismo lugar y en otras partes de Finlandia. En opinión del TEDH, este precepto se

vulnera cuando los Estados otorgan un tratamiento distinto a personas en situaciones diferentes sin que medie una justificación objetiva y razonable. Sin embargo, en el presente caso la estación de servicio no es una actividad comparable con otras que no entrañan tales riesgos para el medio ambiente.

En definitiva, la protección del medio ambiente ha servido en este caso para justificar una restricción a un derecho, el de la propiedad, que además de no gozar de una protección absoluta, su ejercicio ha de ponderarse con otros intereses generales.

- Asuntos *Keceli y Baspinar c. Turquía* de 26 de enero de 2010 y *Bölükbas y otros c. Turquía* de 9 de febrero de 2010. Los dos asuntos presentan hechos muy parecidos y que el TEDH soluciona de manera similar, utilizando la misma argumentación, de ahí que se haga un tratamiento conjunto de ambos asuntos.

En el primer caso se trataba de un terreno agrícola que había tenido originalmente naturaleza forestal y que había sido adquirido por terceros de buena fe. Sin embargo, en virtud de la legislación turca, los terrenos que cambian de calificación procedentes del dominio forestal debían transferirse al Tesoro Público. Esta norma sólo fue alegada por el Tesoro Público cuando varias décadas después, los propietarios de dicho terreno solicitaron su parcelación a las autoridades para poder proceder a su venta. Tras varias reclamaciones en diferentes instancias judiciales, los títulos de propiedad de los reclamantes fueron invalidados sin que éstos percibieran indemnización alguna.

En este primer caso el TEDH afirmó que se trataba de un bien inmobiliario cuya propiedad estaba basada sobre un título válido de propiedad puesto que había sido objeto de registro a favor de terceros, los cuales habían disfrutado de dicha propiedad durante treinta y cinco años sin problema alguno. Según el TEDH, si es verdad que en el ordenamiento jurídico turco existen normas que establecen una prohibición absoluta de apropiación de terrenos que forman parte del dominio forestal, también existen normas que protegen el derecho de propiedad de personas que ostentan títulos de propiedad establecidos de buena fe. La anulación de los títulos de propiedad, por tanto, ha constituido una privación de la propiedad en el sentido de la segunda frase del artículo 1.1 del Protocolo nº1 anexo a la CEDH. El hecho de que dicha privación viniese motivada por el interés general de proteger la naturaleza y los bosques (y consecuentemente se ajusta al requisito de que las restricciones a la propiedad privada deben ser atendiendo al interés general), no impide que los afectados sean indemnizados



por dicha privación. De esta forma, el TEDH afirma que el precepto citado ha sido vulnerado por Turquía.

En el segundo caso se trataba de unos terrenos que en virtud de la comisión catastral formaban parte del Bosque de Belgrado, considerado como un bosque protegido. Sin embargo, ni el propietario de tales terrenos ni sus herederos tenían noticia de este hecho, dedicándose a labores agrícolas sobre los mismos durante décadas. Finalmente las autoridades turcas invalidaron los títulos de propiedad e incluso impusieron penas de cárcel por la ocupación ilegal de un bosque protegido.

En este segundo caso, el TEDH se percató de que ni el causante ni sus herederos habían recibido notificación alguna sobre las conclusiones de la comisión catastral calificando tales terrenos como dominio forestal y que el título de propiedad del causante nunca fue anulado. Sus herederos, por tanto y en virtud del principio de seguridad jurídica, habían confiado en la validez del título de propiedad recogido en el registro de la propiedad, lo que es una prueba incontestable del derecho de propiedad. Además, el TEDH también aquí afirmó que la anulación de los títulos de propiedad constituyó una afrenta al derecho de los reclamantes por cuanto suponía una privación de su propiedad que de no haber venido acompañada por una indemnización supone la vulneración del artículo 1.1 del Protocolo nº 1 anexo a la CEDH.

En ambos casos, por tanto, aunque no se cuestiona que la salvaguarda del medio ambiente es un objetivo legítimo y válido para limitar el derecho de la propiedad, hasta el punto de privar a una persona de su propiedad, ello no significa que los afectados no cuenten con un justo resarcimiento a tal privación.

**Sumari:** 1. Cort Internacional de Justícia (CIJ). 2. Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

A causa de l'absència d'un tribunal o fòrum internacional que tingui competència per resoldre les controvèrsies de caràcter ambiental, la jurisprudència internacional en aquesta matèria, si existeix, es troba disseminada entre diferents jurisdiccions.

### **1. La Cort Internacional de Justícia (CIJ)**

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) és l'únic tribunal internacional que té competència per resoldre qualsevol controvèrsia pel que fa al dret internacional ambiental en virtut de la seva jurisdicció universal. Ara bé, és cert que fins avui els afers de caràcter ambiental han estat força escassos<sup>1</sup>.

No obstant això, el 20 d'abril de 2010 la CIJ va emetre l'esperat pronunciament pel que fa a la controvèrsia que ha enfrontat l'Argentina i l'Uruguai durant els cinc anys passats: l'afer sobre la construcció i posada en funcionament de fàbriques de cel·lulosa o de pasta de paper (més conegudes com a *papereres*) al costat del riu Uruguai, i que van ser autoritzades per l'Uruguai<sup>2</sup>.

Aquest cas té una virtualitat ambiental innegable, ja que bona part de l'argumentació argentina en contra de la construcció de les papereres per part de l'Uruguai es basa en motius ambientals. Així, l'Argentina va interposar un recurs davant la CIJ en què argüia, entre d'altres qüestions, que l'Uruguai havia incomplert una sèrie d'obligacions de caràcter ambiental en autoritzar i construir dues papereres a la vora del riu Uruguai, és a saber:

- L'obligació de prendre totes les mesures necessàries per a la utilització òptima i racional del riu Uruguai.
- L'obligació de prendre totes les mesures necessàries per preservar el medi ambient aquàtic i prevenir la contaminació, i l'obligació de protegir la biodiversitat i les

---

<sup>1</sup> Aquest va ser el cas de l'afer *Projecte Gabcikov-Nagymaros (Hongria c. Eslovàquia)* de 25 de setembre de 1997 i l'opinió consultiva de la CIJ amb relació a la *Legalitat de l'amença o l'ús de les armes nuclears* de 8 de juliol de 1996.

<sup>2</sup> El pronunciament de la CIJ en l'afer sobre les fàbriques de paper al riu Uruguai (l'Argentina c. l'Uruguai) es pot consultar al web de la CIJ: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=au&case=135&k=88>.

pesqueries, inclosa l'obligació de preparar una avaluació d'impacte ambiental completa i objectiva.

- L'obligació de cooperar en la prevenció de la contaminació i en la protecció de la biodiversitat i d'altres pesqueries.

El 4 de maig de 2006 l'Argentina va sol·licitar adoptar mesures provisionals, i va demanar suspendre les autoritzacions per construir les papereres, cooperar amb l'Argentina i que l'Uruguai s'abstingués d'adoptar qualsevol altra mesura unilateral. La Cort, mitjançant la Interlocutòria de 13 de juliol de 2006, va considerar que les circumstàncies no eren tals per requerir mesures provisionals.<sup>3</sup> Concretament, va afirmar que l'Argentina no havia pogut persuadir la Cort que construir les papereres presentava un risc de dany irreparable per al medi ambient.

En la resolució sobre el fons, la CIJ s'ha limitat a les qüestions d'interpretació plantejades per les parts amb relació a l'Estatut subscrit per l'Argentina i l'Uruguai sobre l'administració compartida del riu Uruguai de 1975.<sup>4</sup> D'aquesta manera, la Cort s'ha limitat a considerar les al·legacions de l'Argentina pel que fa als possibles perjudicis sobre el medi aquàtic del riu, sense entrar en consideracions sobre els possibles efectes de les papereres sobre la qualitat de l'aire, el paisatge o el soroll.<sup>5</sup>

En aquest sentit, la Cort ha considerat que l'Uruguai ha incomplert una sèrie d'obligacions de caràcter procedimental que recullen els articles 7 a 12 de l'Estatut de 1975. En virtut de l'article 7, l'Uruguai devia haver informat la Comissió Administradora del Riu Uruguai (CARU) sobre l'autorització de la construcció i posada en funcionament de les papereres. A més a més, aquesta disposició estableix l'obligació de notificar les avaluacions d'impacte ambiental a l'altra part, en aquest cas l'Argentina, a través de la CARU i sempre que les actuacions planejades li poguessin comportar danys transfronterers importants, cosa que l'Uruguai tampoc no va realitzar en el temps i en la forma que tocaven. Pel que fa a la resta d'articles, l'Uruguai no es va atènyer als mecanismes de cooperació previstos als quals ha d'acudir en cas de desacord entre les

---

<sup>3</sup> L'Uruguai també va fer el mateix uns quanta mesos més tard, el 29 de novembre de 2006, sol·licitant a la CIJ que dictaminés l'obligació de l'Argentina d'evitar els bloquejos que la seva població civil estava realitzant al pont sobre el riu Uruguai, tancant el trànsit comercial i turístic de l'Argentina a l'Uruguai. Tampoc la Cort no va accedir a concedir les mesures provisionals demanades per l'Uruguai.

<sup>4</sup> Efectivament, l'article 60.1 de l'Estatut atorga competència a la Cort per conèixer les qüestions dels conflictes que sorgeixin entre les parts pel que fa a l'aplicació i la interpretació de l'Estatut.

<sup>5</sup> A més, deixa també fora de la consideració de la Cort altres possibles obligacions de dret internacional recollides en diferents tractats ambientals, que també van ser invocats per l'Argentina.

parts sobre la realització d'una activitat que pugui tenir impactes sobre la navegació del riu Uruguai, sobre el seu règim jurídic o sobre la qualitat de l'aigua. No obstant això, malgrat haver declarat l'incompliment per part de l'Uruguai, la CIJ no va imposar cap altra forma de reparació d'aquest incompliment més enllà de la "satisfacció" que suposa la sentència condemnatòria per a l'Uruguai. Això perquè, havent complert les disposicions de caràcter processal anteriorment esmentades, l'Uruguai podia haver construït les papereres, fins i tot amb l'oposició de l'Argentina.

Pel que fa al medi ambient, l'Argentina havia al·legat les qüestions substantives següents, a les quals s'han d'adjuntar les contestacions corresponents de la Cort:

- L'obligació de contribuir a la utilització òptima i racional del riu (art. 1 de l'Estatut). La CIJ ha determinat que aquesta disposició establia l'objectiu però no els drets ni les obligacions concretes de les parts, per la qual cosa la seva virtualitat és merament interpretativa. En aquest sentit, cal ponderar els interessos comercials amb els possibles danys que puguin causar-se al medi ambient, tal com estableixen altres disposicions de l'Estatut de 1975, i no necessàriament ha estat conculcat pel fet que l'Uruguai hagi autoritzat construir les papereres.

- L'obligació d'assegurar la gestió sostenible de la terra adjacent al riu perquè no menyscabi el règim del riu o la qualitat de l'aigua (art. 35). L'Argentina havia argumentat que per abastar de primera matèria les papereres s'havia fet una plantació intensiva i extensiva d'eucaliptus al marge del riu Uruguai, que en un futur degradaria aquest terreny, i afectaria la qualitat de l'aigua del mateix riu. No obstant això, la CIJ ha considerat que l'Argentina no havia demostrat suficientment l'impacte negatiu que havia al·legat, per la qual cosa aquesta disposició tampoc no s'ha vulnerat.

- L'obligació de coordinar les mesures per evitar canvis en el balanç ecològic (art. 36). L'Argentina mantenia que l'evacuació de substàncies procedents de les papereres podia alterar el balanç ecològic del riu. No obstant això, la Cort ha considerat que es tractava d'una obligació de conducta dirigida als dos estats i no de resultat. En particular, es tractava d'observar la deguda diligència a l'hora de col·laborar en l'adopció d'aquestes mesures, a través de la CARU. Novament, segons l'opinió de la CIJ, l'Argentina no ha demostrat prou que l'Uruguai hagi rebutjat la cooperació que exigia el precepte.

- L'obligació d'adoptar mesures per prevenir la contaminació i preservar l'ambient aquàtic, segons els acords internacionals aplicables i les recomanacions tècniques

internacionals (art. 41). L'Argentina al·legava que les evacuacions procedents de les papereres vulneraven les obligacions de l'Estatut i d'altres instruments internacionals aplicables entre les parts que prohibeixen tota mena de contaminació que pugui perjudicar la protecció i la preservació del medi ambient aquàtic. L'Uruguai, per la seva banda, defensava que el que prohibeix l'Estatut és sobrepassar els estàndards de contaminació convinguts conjuntament per ambdues parts al si de la CARU. En aquest cas, la Cort també ha considerat que el precepte recull l'obligació d'actuar amb la diligència corresponent amb relació a totes les activitats que s'exerceixen sota la jurisdicció i el control dels estats. Tot això amb l'objectiu de prevenir la contaminació, definida en l'article 40 de l'Estatut de 1975 com la introducció per part de l'ésser humà de substàncies en el medi aquàtic de forma directa o indirecta que produeixen efectes danyosos. En aquest sentit, abans d'exercir activitats que comporten aquests riscos, cal elaborar l'avaluació d'impacte ambiental i, en particular, determinar si l'evacuació de fluids de les papereres es realitza en una concentració que supera els estàndards de gestió sostenible del riu. La Cort ha admès que no tenia prou informació per determinar si aquests riscos hi són ni per decidir consegüentment si l'Uruguai havia incomplert aquesta obligació, informació que l'Argentina tampoc no havia proporcionat fefaentment. D'aquesta manera, la CIJ ha conclòs que l'Argentina no ha demostrat que l'Uruguai no actués amb la diligència deguda ni havia aportat dades concloents que reforcessin que el funcionament de les papereres podia causar danys als recursos vius, a la qualitat de l'aigua o a l'equilibri ecològic del riu Uruguai.

D'aquesta manera, la CIJ ha rebutjat totes les al·legacions de l'Argentina en matèria ambiental, i ha decidit igualment que no s'aplicava el principi de precaució al·legat per l'Argentina per invertir la càrrega de la prova. Consegüentment, les papereres continuaran funcionant, si bé, la Cort ha incidit en el pronunciament sobre l'obligació d'aquests dos països de cooperar a l'hora de supervisar la seva activitat en el futur.

## **2. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)**

Sovint els tribunals encarregats de salvaguardar els drets humans s'enfronten amb supòsits amb clara incidència ambiental. No en va, la protecció del medi ambient es troba estretament unida al gaudi d'alguns drets fonamentals. Però també, a vegades, els drets fonamentals protegits per les convencions internacionals troben límits a l'hora de

salvaguardar altres interessos que s'han de ponderar, per exemple, la protecció ambiental. Aquest és precisament el cas dels supòsits a què es fa referència a continuació.

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha dictat uns quants pronunciaments en els últims mesos que incideixen de forma més o menys indirecta en la protecció del medi ambient, malgrat tractar-se d'una jurisdicció relativa a la salvaguarda dels drets fonamentals que recull la Convenció europea de drets humans.<sup>6</sup> A continuació, se'n resumeixen breument els fets i els fonaments de dret:

- Afer *Huoltoasema Matti Eurén Oy i altres c. Finlàndia* de 19 de gener de 2010. En aquest afer el reclamant és una companyia (Huoltoasema) propietària d'una estació de servei situada en una conca d'aigües subterrànies. Amb l'entrada en vigor de la llei de protecció ambiental finlandesa de 2000, totes les activitats susceptibles de causar contaminació ambiental estaven obligades a sol·licitar llicència a l'autoritat administrativa corresponent. La companyia Huoltoasema va sol·licitar la llicència preceptiva, aprofitant l'ocasió per demanar autorització per ampliar la capacitat d'emmagatzemament de gasolina, que li va ser concedida condicionada a una sèrie de requeriments de reestructuració. No obstant això, el centre de medi ambient Regional Häme va apel·lar la decisió davant el tribunal administratiu corresponent, ja que, segons la seva opinió, l'activitat constituïa un perill per a la qualitat de les aigües subterrànies. Després de diferents recursos, finalment els tribunals van decidir retirar la llicència, ja que les mesures que proposava Huoltoasema no garantien que s'eliminés el risc sobre les aigües subterrànies. Llavors, la reclamant va tornar a sol·licitar llicència, aquesta vegada per reduir la capacitat de gasolina, la qual se li va atorgar en un primer moment, i després se li va retirar novament en altres instàncies judicials perquè no garantia plenament la seguretat de les aigües subterrànies. Finalment, la companyia va haver de tancar l'estació de servei.

Entre els diferents drets fonamentals que segons la reclamant havien conculcat les autoritats judicials i administratives finlandeses, la reclamant va invocar l'article 6.1 de la CEDH, ja que el temps emprat en els diferents procediments sobrepassava el "temps raonable" que requeria el precepte. El TEDH va considerar que els dos procediments que van comportar ambdues sol·licituds de llicència per prosseguir l'activitat de l'estació

---

<sup>6</sup> La jurisprudència del TEDH es pot consultar al web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>

de servei, constituïen una unitat i que en haver tingut una durada total de sis anys i sis mesos, va ser excessiva, i així es va vulnerar el precepte esmentat.

En segon lloc, la companyia reclamant va al·legar que s'havia vulnerat el dret a la propietat que preveu l'article 1 del Protocol núm.1 annex a la CEDH. Sobre aquest punt el TEDH va fer una sèrie de consideracions a favor de la protecció ambiental que val la pena subratllar. Pel TEDH, no hi havia cap dubte que la reclamant tenia una possessió i que se li havia interferit el dret al gaudi pacífic. No obstant això, la interferència en aquest cas es fonamentava en la llei de protecció ambiental finlandesa, que era prou clara, previsible i accessible al públic. Segons la seva opinió, la denegació d'atorgar la llicència d'activitat a l'estació de servei va tenir base legal i perseguia un interès general, com és protegir el medi ambient. El TEDH va prosseguir argumentant que la part reclamant no podia al·legar l'expectativa legítima d'obtenir la llicència i que hauria d'haver considerat que la protecció del medi ambient gaudeix d'una importància creixent actualment. En aquest àmbit, els estats tenen un marge d'apreciació ampli fins al punt de poder imposar una prohibició absoluta sobre la contaminació aquífera, ja que purificar les aigües subterrànies és molt difícil o gairebé impossible, la qual cosa justifica l'important interès general.

Per acabar, el TEDH també va denegar la pretensió de la part reclamant amb relació a la vulneració de l'article 14 de la CEDH, al·legant que l'estació de servei havia estat objecte d'un tracte discriminatori respecte d'altres activitats situades en el mateix lloc i en altres bandes de Finlàndia. Segons el TEDH, aquest precepte es vulnera quan els estats atorguen un tractament diferent de persones en situacions diferents sense que mitjanci cap justificació objectiva i raonable. No obstant això, en aquest cas, l'estació de servei no és cap activitat comparable amb d'altres que no comporten aquests riscos per al medi ambient.

En definitiva, en aquest cas, la protecció del medi ambient ha servit per justificar la restricció a un dret, el de la propietat, que a més que no gaudia de cap protecció absoluta, el seu exercici ha de ponderar-se amb altres interessos generals.

- *Afers Keceli i Baspınar c. Turquia* de 26 de gener de 2010 i *Böyükbas i altres c. Turquia* de 9 de febrer de 2010. Els dos afers tenen fets molt semblants i el TEDH els soluciona de manera similar, utilitzant la mateixa argumentació, d'aquí ve que es faci un tractament conjunt d'ambdós afers.

En el primer cas es tracta d'un terreny agrícola que havia tingut originàriament natura forestal i que havia estat adquirit per tercers de bona fe. No obstant això, en virtut de la legislació turca, els terrenys que canvien de qualificació procedents del domini forestal havien de transferir-se al Tresor Públic. Aquesta norma només va ser al·legada pel Tresor Públic quan dècades després, els propietaris d'aquest terreny van sol·licitar la parcel·lació a les autoritats per poder vendre'l. Després de diferents reclamacions en diferents instàncies judicials, els títols de propietat dels reclamants es van invalidar sense que aquests percebessin cap indemnització.

En aquest primer cas, el TEDH va afirmar que es tractava d'un bé immobiliari la propietat del qual es basava en un títol vàlid de propietat, ja que havia estat objecte de registre a favor de tercers, els quals havien gaudit de la propietat durant 35 anys sense cap problema. Segons el TEDH, si és cert que en l'ordenament jurídic turc hi ha normes que prohibeixen absolutament l'apropiació de terrenys que formen part del domini forestal, també hi ha normes que protegeixen el dret de propietat de persones que posseeixen títols de propietat establerts de bona fe. L'anul·lació dels títols de propietat, per tant, ha privat la propietat en el sentit de la segona frase de l'article 1.1 del Protocol núm.1 annex a la CEDH. El fet que la aquesta privació estigués motivada per l'interès general de protegir la natura i els boscos (i consegüentment s'ajusta al requisit que les restriccions a la propietat privada han d'atendre a l'interès general), no impedeix que els afectats s'indemnitzin per la privació. D'aquesta manera, el TEDH afirma que Turquia el ha vulnerat el precepte esmentat.

En el segon cas es tracta d'uns terrenys que, en virtut de la comissió cadastral, formaven part del Bosc de Belgrad, considerat un bosc protegit. No obstant això, ni el propietari dels terrenys ni els seus hereus tenien cap notícia d'aquest fet, i es dedicaven a feines agrícoles en aquest sòl durant dècades. Finalment, les autoritats turques van invalidar els títols de propietat i fins i tot van imposar penes de presó per ocupació il·legal d'un bosc protegit.

En aquest segon cas, el TEDH es va adonar que ni el causant ni els seus hereus havien rebut cap notificació sobre les conclusions de la comissió cadastral en què es qualificava els terrenys com a domini forestal i que el títol de propietat del causant mai no es va anul·lar. Els seus hereus, per tant, i en virtut del principi de seguretat jurídica, havien confiat en la validesa del títol de propietat recollit en el Registre de la Propietat, la qual cosa és una prova incontestable del dret de propietat. A més a més, el TEDH també va



afirmar que l'anul·lació dels títols de propietat havia constituït un afront al dret dels reclamants perquè suposava privar la seva propietat, que si no s'hagués acompanyat de cap indemnització, vulnerava l'article 1.1 del Protocol núm. 1 annex a la CEDH.

En ambdós casos, per tant, tot i que no es qüestiona que la salvaguarda del medi ambient és un objectiu legítim i vàlid per limitar el dret de la propietat, fins al punt de privar una persona de la seva propietat, no significa que els afectats no tinguin cap rescabament just d'aquesta privació.